

La consulta plantea como debe actuarse para, en casos concretos, mantener en secreto el dato del domicilio de las víctimas de violencia de género o restringir su acceso a determinados empleados públicos, que con motivo de las funciones que desempeñan puedan acceder a aquél, a fin de evitar que pueda llegar a ser conocido por sus agresores.

La consulta formulada excede con mucho de las funciones de esta Agencia, ya que no existe ninguna previsión legal en el sentido solicitado. La normativa vigente en materia de protección de datos establece un conjunto de medidas de seguridad cuyo objetivo no es impedir, en el caso de los ficheros públicos, el acceso a los datos por parte de empleados públicos determinados, sino establecer una limitación de acceso a los datos con carácter general, permitiéndolo exclusivamente a aquéllos empleados públicos que para el ejercicio de sus funciones precisen tener conocimiento de datos en ellos contenidos. Por otra parte, la consulta se hace en forma genérica siendo así que el dato del domicilio figura habitualmente en muy diversos ficheros administrativos, por lo que, teniendo en cuenta el motivo de la consulta, se analizarán las medidas de seguridad aplicables a los ficheros que contienen datos relativos a violencia de género.

A este respecto cabe señalar que el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, crea dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

Dicho Decreto establece en su artículo 8 que *“La información contenida en los Registros Centrales integrados en el Sistema deberá comprender, con carácter general, los siguientes datos:*

*c) Los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de género.”*

El artículo 15 dispone respecto de la seguridad de los datos que *“Se aplicarán a los datos de carácter personal contenidos en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de*

*desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”*

El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, constituye en la actualidad la normativa vigente en materia de medidas de seguridad aplicables a los tratamientos de datos de carácter personal. El artículo 80 de esta norma clasifica las medidas de seguridad aplicables a los ficheros o tratamientos de datos en tres niveles, debiendo adoptarse, en cada caso, el nivel correspondiente en función de la naturaleza de los datos a tratar. Debe tenerse presente, además, que dichas medidas tienen un carácter acumulativo, de forma que las establecidas para cada nivel exigen incorporar las previstas para los niveles inferiores.

Respecto a los ficheros a los que nos venimos refiriendo dispone su artículo 81, número 3, que *“Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:*

*c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.”*

Del examen de las diferentes medidas de seguridad aplicables cabe destacar, en primer lugar, que el artículo 91 del Reglamento impone ya en los ficheros de nivel básico como una de las medidas de seguridad la del control de acceso, disponiendo en su número primero que *“Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones”*, para ello exige en su número tercero que *“El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.”* Mientras que el número 2 especifica que *“El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.”*

Por perfil de usuario, se entiende, de conformidad con lo previsto 5.2 j del Reglamento aquellos *“accesos autorizados a un grupo de usuarios”*, esto es, define el tipo de información y el tipo de acciones que puede realizar cada grupo de usuarios, mientras que usuario, según la letra p del mismo artículo será el *“sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos.”*

Asimismo, se establece una obligación de identificación y autenticación de los usuarios, exigiéndose ya desde el nivel básico una identificación personalizada de los usuarios, a diferencia de la normativa anterior en la que tenían cabida los usuarios genéricos. Dispone el artículo 93.1, a estos efectos, que *“El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.”* Por su

parte, el número 2 del mismo artículo prevé que *“El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.”*

Esta contraseña solo debe ser conocida por el usuario autorizado, dispone así el artículo 93.3 que *“Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.”*

En el nivel medio, esta medida de identificación y autenticación se vuelve más rigurosa ya que, a las medidas anteriores previstas para el nivel básico, se añade la contenida en el artículo 98 según el cual *“El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.”*

Por último, en el nivel alto, se requiere ya un registro de cada intento de acceso que se produzca, establece el artículo 103.1 que *“De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado.”* Mientras que el número segundo del mismo artículo dispone *“En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.”*

Por otra parte, dispone el artículo 89 que *“Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad.”*

El documento de seguridad viene regulado en el artículo 88 del Reglamento, previniendo su número primero que *“El responsable del fichero o tratamiento elaborará un documento de seguridad que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información.”* y definiendo en los números siguientes su estructura y contenido.

La aplicación de lo anteriormente expuesto al caso que nos ocupa supone que, en primer lugar, sólo podrán tener acceso al Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica aquellas personas que respondan al perfil establecido para ello y solamente respecto de aquellos recursos precisos para desarrollar las funciones que les competen. El artículo 7 del Real Decreto 95/2009, prevé expresamente quien puede acceder a la información contenida en dicho registro estableciendo lo siguiente:



*“1. Además de los indicados en el artículo 5, el Ministerio de Justicia autorizará, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información contenida en el Registro Central de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica, a:*

*a) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.*

*b) Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil responsables de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.*

*c) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.*

*d) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada y salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.*

*e) Las unidades de policía especialmente encargadas del control y seguimiento de la violencia doméstica, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de víctimas de violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios autorizados.*

*f) Las comunidades autónomas, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de las víctimas de violencia doméstica o de género, a través del responsable del punto de coordinación o, en su caso, a través de las personas designadas por dicho responsable. Este acceso directo se entenderá sin perjuicio de las comunicaciones previstas por la disposición adicional primera de este real decreto.*

*g) Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de víctimas de violencia doméstica o de género. En el caso de las delegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer o las personas que éste designe; en el caso de las subdelegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad contra la violencia sobre la mujer o las personas que éste designe.*

*h) La Administración Penitenciaria, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios autorizados.”*

En segundo lugar, no todas las personas que respondan al perfil señalado en el artículo anteriormente transcrito tendrán acceso al fichero a que se viene haciendo referencia, sino solamente aquellas a quien se califique como usuarios en el documento de seguridad correspondiente. Estas personas deberán acceder con su contraseña, que como ya se ha señalado debe ser personal y secreta sin que sean admisibles las contraseñas genéricas. Por último para que pueda conocerse si alguien ha accedido a dicho fichero, y en su caso, quién, en qué momento y a qué información, deberá constar, en lo que el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 denomina registro de accesos, cada uno de aquéllos que se haya producido, tal y como describe el artículo 103 del aludido Reglamento y reitera el artículo 14 del Real decreto 95/2009 al disponer que *“De cada intento de acceso se guardará como mínimo la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.”*